

ria á lo que oyó á D. José de Sarena y D. Juan B. Garesto, y que el primero de estos se refiere al segundo, quien dice que á Sarena y Álvarez solo les dijo sin asegurárles nada que sospechaba podría suceder algo al "Haydee," pues por Magne supo tenía un roll en blanco, pero sin decirle que persona lo obtuvo, lo que en resumen se refiere á un delito, de otra persona y este dicho sin mas apoyo que el de sospechas; y por lo mismo lo declarado por Álvarez de la Rosa, no arroja ningun delito contra Casamayor, segun lo dispuesto en las leyes 28 y 29 del tit. y part. citados antes; y considerando por último: que ejecutados como lo fueron Magne y Gandulá, y puestos en libertad, Meza y Bogarín y Garesto por no resultarles culpa, la presente causa está en la actualidad pendiente respecto de Casamayor, reducido á prision desde el 10 de Junio de 1865, y del italiano Alejandro N. que se halla prófugo; por los fundamentos expuestos, y ademas con relación á Casamayor, con fundamento de lo que ordena, la ley 26, tit. 1º part. 7ª y de conformidad con lo pedido por el C. fiscal, se decreta:

Primero; que se confirma la sentencia pronunciada el 4 de Febrero de 1870, por el tribunal de Circuito de Mazatlan que absuelve por falta de pruebas á Estéban Casamayor del cargo que se le hizo reputándolo cómplice de la captura de la bandolera nacional "Haydee" y de los homicidios y robo cometidos á su bordo en 5 y 8 de Mayo de 1865.

Segundo; Chancélese la fianza bajo la cual quedó en libertad, en virtud de lo dispuesto en dicha 1ª instancia.

Tercero; se confirma también en la parte que recomienda á las autoridades del Estado y especialmente, á las de los puertos del Pacífico, la aprehension de Alejandro N. para lo cual se les remitirá lo relativo á su filiación.

Cuarto; hágase saber y devuélvase las actuaciones de 2ª y 3ª instancia al tribu-

nal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron esta 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de la nacion de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—J. M. Lafragua.—M. Auza.—M. Zavala.—Luis Maria Aguilar, secretario.

Son copias. México, Enero quince de mil ochocientos setenta y dos.—Hernandez.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Guanajuato por la casa "Valencia y Gonzalez," contra el decreto núm. 31 de la legislatura del Estado, que grava á las mantas que en él se consuman, con tres centavos por libra.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El promotor dice: que con motivo de haberse iniciado ante vd. dos juicios de amparo, uno por D. Manuel Gonzalez que es el que ha promovido los presentes autos y otro por D. Enrique M. Rubio, en cuyos dos juicios se trata de obtener la misma cosa, la queja es contra la misma autoridad, por un mismo acto, y en fin, en todo y por todo concurren las mismas circunstancias, habiendo dictaminado ya en el juicio de D. Enrique Rubio, como las mismas razones y no otras son las que tiene que aducir en el presente dictámen, ha creído deber reproducir aquel en todas sus partes y es como sigue:

El promotor, contestando el traslado que se le ha mandado correr por el auto de 6 de Octubre, dice: que con referencia á la opinion que se ha formado del presente juicio y tiene emitido en su primer escrito, la

cuestion que se agita depende de la resolución de un punto de derecho aplicable al caso particular de que se trata.

Podiera parecer á primera vista muy obvia la resolución del caso, supuesto que la retroactividad de las leyes es un principio en pugna con los derechos naturales del hombre, pues como dice el sabio Escribano: "¿Qué sería de la libertad civil si pudiese temer el hombre que aun despues de haber obrado sin infringir las leyes quedaba expuesto al peligro de ser perseguido por sus acciones ó turbado en sus derechos en virtud de leyes posteriores?" No es sin embargo el caso tan sencillo que no pueda resolverse sin meditarlo.

Existia, como asienta la parte de D. Manuel Gonzalez y es un hecho, un decreto de la legislatura del Estado que abolió el único impuesto que reportaban las mantas ó hilazas que se introdujeran al mismo Estado: este decreto que es el marcado con el núm. 28, debia empezar á regir desde el día 1º de Octubre próximo. No existiendo como no existia otro decreto que impusiera contribucion á los efectos mencionados, regia esta ley como única sobre la materia: las hilazas y mantas quedaron libres de todo gravámen, y los CC. por consiguiente autorizados para introducirlas, con este beneficio bajo la garantía de la ley. Posteriormente y dentro del término en que se expidió una ley nueva imponiendo á los efectos repetidos una contribucion de tres centavos por libra.

El decreto mencionado núm. 28, no porque marcaba un tiempo ó época para que surtiera sus efectos en favor de los introductores dejaba de existir, y los derechos que por él se otorgaban á los CC. los adquirieron estos desde el momento de la promulgacion; solo que se les fijó el día desde el cual habian de disfrutarlos: esto es un hecho que no tiene cuestion, porque de otra manera no se explicaria la promulgacion anticipada de la ley. ¿Y qué derechos

mas legítimos y sagrados que los otorgados por una ley expresa y terminante?

Sentado pues, que existiendo únicamente la ley derogatoria de que hacemos mencion, los CC. adquirieron un derecho perfecto para introducir mantas desde el día 1º de Octubre sin pagar por ellas ningun impuesto, resta examinar hasta qué punto la promulgacion de una ley posterior les quitara ese derecho.

Lejos del promotor que suscribo la idea absurda de pretender que el H. cuerpo legislativo no tenga el derecho inviolable de legislar en todas materias y derogar sus leyes ó modificarlas en el tiempo y forma que lo crea oportuno. La ley ó decreto marcado con el núm. 31 y que se promulgó en esta ciudad con fecha 27 del mes pasado, no pugna en nada con las instituciones federales y es y debe ser obedecida y obligatoria para todos los habitantes del Estado. La legislatura, para la generalidad de los CC. no infringe con su decreto ninguna de las garantías que nos otorga la Constitucion; pero en el caso particular que nos ocupa, el promotor sí cree que hay retroactividad. El derecho adquirido por una ley, empieza como se lleva dicho desde el día de su promulgacion, porque desde ese momento es obligatorio su cumplimiento; muy bien puede ser que los efectos del derecho adquirido ó el gravámen de la obligacion que la ley imponga no se resienta ó se disfrute sino hasta cierto tiempo; pero la ley es ley, y si no surte sus efectos, sí obliga desde que se promulga.

Bajo la garantía del decreto núm. 28 que derogó el núm. 10, único que existia sobre impuestos á las mantas ó hilazas, y que por consecuencia restableció las cosas al estado que antes tenian, D. Manuel Gonzalez hizo un pedido considerable de mantas para introducirlas en esta capital despues del 1º de Octubre libres de derechos, en uso del que le concedia la ley vigente; en camino sus fardos, se promulgó la ley de 27 de Setiembre que al parecer dejaba

sin efecto el decreto anterior que, como se ha dicho, abolia el impuesto único que existía sobre las mantas y que las dejó por consiguiente libres de derechos; si pues la parte de Gonzalez logra justificar satisfactoriamente, primero, que el pedido de sus mantas lo hizo despues de promulgado el decreto núm. 28 y antes de que viera la luz pública el número 31, y segundo, que desde el día en que su cargamento se puso en marcha apenas pudiera haber el tiempo preciso para que dicho cargamento llegara á esta capital en los primeros días del mes de Octubre, si esta justificación es completa, D. Manuel Gonzalez debe considerarse libre de cumplir con los preceptos del último de los decretos mencionados, porque ha obrado en uso de un derecho que le dió la ley, para hacerlo efectivo en el primer momento en que segun la misma ley se podia aprovechar de sus ventajas.

La ley promulgada con posterioridad no puede enervar los derechos que otorgó la anterior para aquellos que pretendieron usarlos dentro de sus términos.

El carácter político que la ley les ha querido dar á los tribunales y juzgados de la federacion, por su institucion misma, le dá el derecho, como han dicho bien algunos de nuestros escritores modernos, de juzgar, no segun las leyes como es el axioma general que sirve de base á la administracion de la justicia ordinaria, sino entrar en el exámen ó interpretacion de la ley misma. Hé aquí pues un caso en que no basta la ley por sí sola para decidir si pugna, atento el caso particular que motiva este juicio, con las garantías individuales; es necesario como dice Bobadilla en su política, atender mas al legislador que á la letra de la ley, de la cual en muchos casos conviene desviarse, mucho mas cuando causa perjuicio. Es urgente presumir en el presente caso, que el legislador no previó que alguno ó algunos de los ciudadanos pudieran encontrarse en las circunstancias excepcionales que se encuentra Gonzalez, pues de

otra manera hubiera salvado el caso en su mismo decreto, porque una sutileza engañadora no es ni puede ser presumible en un cuerpo tan digno, tan circunspecto y respetable, y de tan acreditada sabiduría como lo es el cuerpo legislativo del Estado. Lejos de él la intencion de expedir una de esas leyes de dos caras, como ha dicho uno de los autores citados arriba, que teniendo un ojo fijo sobre lo pasado y otro sobre lo venidero, secarian la fuente de la confianza y llegarían á ser un principio eterno de injusticia, de trastorno y de desorden.

La conviccion del promotor suscrito sobre la lealtad del legislador es tal, que en su concepto ha sido por demas la iniciacion de este juicio de amparo, porque hubiera sido bastante ocurrir directamente á la misma legislatura solicitando la excepcion para que esta la hubiera concedido, previa la justificación de los hechos que ponen á D. Manuel Gonzalez fuera de la regla que abraza á los demas.

Parece lo que se lleva expuesto bastante para justificar, que D. Manuel Gonzalez no está en el caso de sufrir los perjuicios que les imparto el decreto núm. 31 de la legislatura del Estado á los introductores de mantas ó hilazas solo para el efecto de no pagar la alcabala por el cargamento á que se refiere en sus escritos anteriores, siempre que consiga probar cumplidamente los hechos que menciona en sus mismos escritos, que son los que lo ponen en el caso excepcional; y que por consecuencia, la justicia federal debe ampararlo para que no quede violado en perjuicio del ya citado Gonzalez, el art. 14 de nuestro pacto federal.

Por todo lo expuesto el promotor pide al juzgado se sirva declarar, que la justicia de la Union ampara á D. Manuel Gonzalez contra la H. legislatura del Estado y lo exime de dar cumplimiento al decreto núm. 31, previos los requisitos y en los términos que lleva expuesto; así como, que

el repetido Gonzalez reponga estos pliegos con los del sello que corresponde.

Guanajuato, Octubre 10 de 1868.—Zenon J. de Velasco.

Sentencia del C. juez de Distrito.

Guanajuato, diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio de amparo promovido por D. Manuel Gonzalez á nombre de la casa de comercio de Valencia y Gonzalez, patrocinado sucesivamente por los CC. Lícidos. Joaquín Obregon, Joaquín Chico é Ignacio Ayala, contra el decreto núm. 31 que el 27 de Setiembre del año de 1868 expidió la II. legislatura del Estado, gravando á las mantas é hilazas que en él se consuman con tres centavos por libra, que se cobrarán en el lugar de la introduccion, en el de la venta ó en el del final destino de los efectos: vistos los escritos del quejoso en que funda su solicitud alegando, que habiendo la II. legislatura por su decreto núm. 28 fecha 26 de Junio de 1868, derogado el que expidió bajo el núm. 10 el 4 de Marzo del mismo año, por el que se habian gravado las mantas é hilazas con cinco centavos por libra, y habiéndose en ese decreto núm. 28 fijado para que empezara á surtir la derogacion del núm. 10, el 1º de Octubre del mismo año de 1868, desde cuya fecha debian en consecuencia quedar libres de todo impuesto las mantas é hilazas que se consumieran en el Estado, el decreto núm. 31 al gravar de nuevo esos efectos sin tomar en consideracion ó exceptuar del gravámen los cargamentos que habian salido de las fábricas, publicado ya el decreto núm. 28, con destino á esta capital y á otros puntos del Estado, y con objeto de que llegaran del primero de Octubre en adelante para no tener así que sufrir, supuesto las prevenciones de ese decreto, impuesto alguno, viola las garantías que concede la Constitucion general en su art. 14,

porque retrotrae las prevenciones en él consignadas á hechos que han tenido lugar antes de que se expidiera: vistos los pedimentos del C. promotor fiscal que manifestó estar conforme en que se abriera el juicio promovido por el quejoso y en que se le concediera el amparo que solicita: el oficio de la H. legislatura del Estado en que devuelve sin evacuar el traslado que en el auto por el que se declaró abierto este juicio mandó correrse del expediente, conforme á las prevenciones del art. 7º de la ley de 30 de Noviembre de 1861, manifestando que no se consideraba parte en el asunto y protestando dejar á salvo cuanto correspondía á su decoro y al carácter de representante legítimo del Estado: vistas por último las pruebas rendidas durante la dilacion que al efecto se concedió á las partes: los informes producidos en el acto de la vista, tanto por el ministerio fiscal, como por el abogado patrono del quejoso: la recusacion con causa hecha y admitida del C. juez propietario por la que, y en virtud de la escusa de los CC. jueces suplentes 1º y 2º, han pasado en conocimiento estos autos al C. juez 3º que suscribe: la manifestacion de D. Manuel Gonzalez por la que hizo presente, que en virtud de la extincion de la casa Valencia y Gonzalez á nombre de la que habia gestionado en este asunto, habian pasado sus derechos á D. Eusebio Gonzalez: la citacion para sentencia, y todo lo demás que consta de autos y ver convino.

Considerando: que siendo por el art. 101 de la Constitucion general de la República á los tribunales federales á los que corresponde la resolucion de toda controversia que se suscite por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, y previniendo el art. 2 de la ley de 30 de Noviembre que todo habitante de la República que en su persona ó intereses crea violadas las garantías que le otorgan la Constitucion ó sus leyes orgánicas, tiene derecho de ocurrir á la justicia federal en la forma que prescribe la ley, so-

licitando amparo y proteccion, es este juzgado el competente para conocer y resolver sobre la solicitud que ha hecho D. Manuel Gonzalez pidiendo se le ampare y proteja, por creer violada en sus intereses por el decreto núm. 31 de la H. legislatura del Estado, la garantía que le concede el art. 14 de la Constitucion general de la República.

Considerando: que conforme á las prevenciones de los artículos 101 y 102 de esa Constitucion dos son las condiciones necesarias para que haya lugar á conceder el amparo, á saber: que la ley ó acto que motiva la queja viole las garantías individuales, y que haya un caso especial por el que en virtud de esa ley ó acto, el quejoso sufra la violacion de alguna de esas garantías: que por lo que respecta á la existencia del caso especial que requiere el legislador, no hay duda alguna acerca de ella supuesto que por las justificaciones rendidas durante la dilacion probatoria aparece plenamente comprobado el hecho, de que el 1º de Octubre de 1868, es decir, cuando conforme al decreto núm. 28 las mantas ó hilazas debian quedar si no se hubiera expedido el decreto núm. 31, libres de pagar impuesto alguno, llegaron á esta ciudad cuatrocientos diez tercios consignados á D. Manuel Gonzalez bajo guías despachadas en Salvatierra y Chamacuero despues de expedido el decreto núm. 28 y antes de la promulgacion del núm. 31, de manera que no resta sino examinar si se ha causado la violacion de garantías que se alega.

Considerando: que el art. 14 de la Constitucion general de la República previene, que no podrá expedirse ninguna ley retroactiva y que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley, principio que tiene por objeto impedir, tanto que la seguridad personal sea violada castigándose hechos anteriores por medio de leyes dadas con poste-

rioridad al día en que ellos tuvieron su verificativo, como que derechos legitimamente adquiridos bajo la garantía de una ley vigente sean despues destruidos ó modificados en perjuicio del que los adquirió, por una ley posterior y contraria á las preexistentes; y siendo esta la garantía que alega D. Manuel Gonzalez fué violada en sus intereses por el decreto núm. 31 de la H. legislatura, hay que examinar si realmente este decreto por lo que respecta al caso especial hecho valer por el quejoso, tiene el carácter de una ley retroactiva ó en otros términos, si por no haberse exceptuado en ese decreto del pago del impuesto que en él se establece los cargamentos que salieron de las fábricas despues de expedido el decreto núm. 28 y antes de la publicacion del núm. 31, la aplicacion de él al caso de D. Manuel Gonzalez viola, destruye ó modifica en su perjuicio derechos ya adquiridos.

Considerando: que segun lo enseña Escribhe en su Diccionario de Legislacion art. "Efecto retroactivo" párrafo 3º, los derechos adquiridos son los que han entrado en nuestro patrimonio, que forman parte de él y que no pueden sernos quitados por aquel de quien los obtuvimos: que en consecuencia, si bien es cierto que la facultad que nos dá una ley no puede en manera alguna constituir por si sola un derecho adquirido, y por lo mismo esa facultad podrá quitársenos por el legislador que nos la concedió sin violar derechos adquiridos y sin que pueda considerarse que se dá por esto efecto retroactivo á la nueva disposicion por la que se nos quita, tambien lo es que el hecho ó hechos que hayan tenido lugar en uso de esa facultad, si constituyen como lo enseña Escribhe en el paraje citado, derechos adquiridos, de manera que si eso hecho ó hechos han empezado á tener lugar y constituido una operacion perfecta bajo el imperio de una ley, aunque vengan á consumarse y á producir sus efectos despues de dada otra nueva, es la ley anterior

y no la nueva la que debe aplicárseles, "Quaecumque negotia, dice Tobías Jacob Reinharth en sus selectas observaciones, tom. 1, obs. 49, núm. 5,—jam ante legem novam latam, quoad essentiam suam fuerunt perfecta, licet consumationem suam suos quo effectus ab actu demum post legem novam futuro eo que non extensivo adhuc expectent ea ad præterita omnino referenda sunt, adeoque ex anterioribus legibus, nequaquam vero ex nova lege lata dijudicanda;" y Julio Caponi en sus disertaciones forenses, disertación núm. 80, trae la misma doctrina: "El acto, dice este autor, incoado en tiempo en que era lícito, si se perfecciona en otro tiempo en que ya no era permitido vale en virtud de su principio, porque nunca la ley comprende los hechos pasados sino tan solo los futuros" "Actus inchoatus tempore lícito si perficiatur eo tempore quo inchoare non licet, ex virtute principii valet. quo casu nunquam lex præterita sed futura comprehendit."

Considerando: que según lo que se ha expuesto y consta de autos D. Manuel Gonzalez, haciendo uso de la facultad que concedió el decreto núm. 28 para introducir desde el 1º de Octubre en adelante á esta capital y á los demás puntos del Estado mantas é hilazas libres de todo gravámen, hizo venir de Salvatierra y Chamacuero un cargamento de mantas con objeto de que llegara, como en efecto llegó á esta ciudad, del 1º de Octubre en adelante: que por el hecho de haberse pedido y remitido ese cargamento, vigente el decreto núm. 28 y antes de publicarse el núm. 31, evindentemente adquirió D. Manuel Gonzalez el derecho de introducirlo, siempre que esto fuera desde 1º de Octubre en adelante, á esta capital sin pagar impuesto alguno, y en consecuencia aun cuando antes del 1º de Octubre se espidió el decreto núm. 31 gravando de nuevo las mantas é hilazas, las que venian consignadas á D. Manuel Gonzalez no podian quedar sujetas á ese nuevo gravámen por que el hecho habia si-

do incoado y la operacion se habia perfeccionado por el pedido y expedicion que se hizo del cargamento bajo la garantía del decreto núm. 28, aun cuando vino á consumarse vigente ya el núm. 31.

Considerando: que en consecuencia, no puede caber duda en que al gravarse de nuevo por el decreto núm. 31 las mantas é hilazas en el lugar de su introducción, en el de su venta, ó en el de su final destino, sin exceptuar los cargamentos que se hubieran pedido y remitido antes de la publicación de ese decreto y que debieran llegar despues del 1º de Octubre, en cuyo caso estaba el consignado á D. Manuel Gonzalez, se atacaban á este señor derechos ya adquiridos, se hizo volver la ley hacia lo pasado, mudándose en su perjuicio supuesto que se le imponia un gravámen que antes de ella no estaba obligado á pagar, y se le dió en consecuencia un efecto retroactivo violando así la garantía que concede el art. 14 de la Constitucion de la República.

Considerando: que aunque es innegable el derecho que el legislador tiene para decretar impuestos y revocar sus leyes cuando le parezca conveniente hacerlo, sin que esto solo pueda ni deba estimarse, según que se ha dicho, como una violacion de derechos por aquellos á quienes la nueva ley es gravosa, pues que el legislador al hacer una concesion, al otorgar un permiso, jamás contrata, ni queda obligado; esta libertad tiene sus límites, de manera que si se ha hecho uso de la ley mientras ella estaba vigente deben respetarse al derogarla los derechos adquiridos en virtud de ese uso. "El legislador, dice el Sr. Merlin en su repertorio de jurisprudencia, artículo. "Efecto retroactivo," seccion 3ª párrafo 1º núm. 3, jamás contrata cuando concede una facultad; permite pero no se obliga; conserva siempre en consecuencia el poder de retirar su permiso y no tiene derecho de quejarse aquellos á quienes lo retira antes de que hayan hecho uso de él; que en consecuencia, el principio consignado en las leyes mas antiguas. "Nemo

potest mutare consilium sumu in alterius injuriam." Digesto Lib. I. Tit. XVII. Leg. LXXV. debe ser respetado aun por el legislador, y como enseña Pufendorf sería una muy grande injusticia pretender derogar la ley sin tomar en cuenta los efectos que haya producido. "Es preciso dice este autor, tener cuidado de no confundir la misma ley positiva con los derechos que han sido adquiridos con motivo de ella. La ley puede ser derogada por el legislador; pero los derechos que se hayan adquirido en virtud de esa ley mientras que subsistia, no se pierden por esto. En efecto habria una suma injusticia en pretender abolir con la ley todos los efectos que ella hubiera producido." (Droit de la nature et desgenos. Tome 1º Lib. 1º Cap. 6º párrafo 6º)

Considerando: que la violacion y ataque á la garantía del art. 14 de la constitucion política federal ha tenido lugar al decretarse el impuesto sin la excepcion de que se ha hecho mérito, y que aunque esa violacion haya venido á hacer efectiva al aplicarse la ley, esta es la que ha causado el agravio, y no la autoridad que al aplicarla no hacia sino cumplir con lo que en ella se le ordenaba, no correspondiéndole ni debiendo entrar en el exámen de su justicia ó injusticia: que las acciones en derecho general no se dan ni pueden darse contra el que ó los que hacen efectivos los mandatos de la autoridad de la que son subalternos, sino directamente contra la autoridad que ordena; que en consecuencia, la queja en este juicio debió dirigirse y se dirigió contra la legislatura que expidió el decreto, y no contra la autoridad que lo puso en ejecucion ó aplicó: que por lo mismo, á esa legislatura es á la que debió tenerse y se tuvo por parte en el juicio para los efectos del art. 7º de la ley de 30 de Noviembre de 1861 y que se corrobora mas la idea de que así en efecto debió hacerse, si se atiende, por una parte á que el art. 101 de la constitucion federal, al hablar de las controversias que corresponde resolver á los tribunales de la federa-

cion, dice que las que se susciten por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, de manera que conforme al artículo y á la ley orgánica respectiva, el amparo tiene lugar ya contra una ley, ya contra un acto, y que en consecuencia, si siempre fuera contra el que aplica la ley contra el que debiera solicitarse, aun cuando el agravio estuviera en la ley misma, no habria para que concederlo ya contra una ley, ya contra un acto, supuesto que en todo caso era contra un acto contra el que debería solicitarse; y por otra, á que debiéndose por los artículos 7º y 12º de la ley citada de 30 de Noviembre de 1861 oirse en el juicio á la autoridad responsable, y exigirse la responsabilidad si la ha habido, malamente podria otra autoridad que no fuera la misma que dictó la órden rendir el informe correspondiente acerca de los motivos que tuvo para dictarla, y malamente podria exigirse la responsabilidad al que solo ejecutó ó aplicó en cumplimiento de su deber la órden que dió origen á la queja; y que aunque por los artículos 5º y 9º de la nueva ley de 20 de Enero de 1869 está mandado que sea á la autoridad inmediata ejecutora del acto reclamado en el recurso del quejoso á la que se tenga por parte para el efecto de rendir el informe de que se viene haciendo mérito, esta ley no se habia expedido en la fecha en que se promovió el presente juicio, y es solo á las determinaciones de la de 30 de Noviembre de 1861 á las que debió atenderse; y ésta en su art. 7º solo mandaba como se ha dicho, que á la autoridad responsable se pidiera el informe sin determinar que ésta fuera la que habia ejecutado ó tratado de ejecutar la ley ó acto reclamado.

Considerando por último: que aunque la H. legislatura se negó á dar el informe que previene la ley, esta no es, ni puede ser obstáculo para pronunciar el fallo que corresponda en el presente asunto, supuesto que ese informe es un derecho que la ley concede á la autoridad responsable para que pue-

da juzgarse con mas acierto acerca de la queja que en su contra se promueve, y no un requisito esencial para la validez del juicio, para la que basta que el juzgado haya cumplido con la prevencion de la ley pidiendo ese informe en el tiempo que ella ha determinado.

Por todo lo expuesto y con fundamento de las leyes y doctrina que se han citado en los considerandos que anteceden, se resuelve:

La justicia de la Union, ampara y protege á la casa de Valencia y Gonzalez, hoy representada por D. Eusebio Gonzalez, contra el decreto número 31 de la II. Legislatura del Estado para que no se haga efectivo ese decreto en el cargamento de cuatrocientos diez tercios de mantas que llegaron á esta ciudad el primero de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, consignados á Don Manuel Gonzalez, por violarse en este caso con el impuesto decretado la garantia que otorga el artículo 14 de la Constitucion federal á todos los habitantes de la República.

Hágase saber; publíquese este fallo en el periódico oficial del Estado y en el de la capital de la República; y remítanse estos autos, de conformidad con la prevencion del artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así el C. Lic. Ignacio Alcázar, juez 3º suplente de Distrito, definitivamente juzgando, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Ignacio Alcázar.*—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero diez de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Guanajuato, por la casa Valencia y Gonzalez, contra el decreto número 31 de la Legislatura del

Estado, fecha 27 de Setiembre de mil ochocientos sesenta y ocho, que dispone que las mantas é hilazas que se consuman en el Estado paguen como alcabala tres centavos por libra desde la publicacion de dicho decreto, y que el impuesto se cobre en el lugar de la introduccion de los efectos, en el de su venta, ó en el de su final destino; fundándose la casa quejosa en que ese decreto produce efecto retroactivo, porque el decreto número 28 derogó el número 10 que disponia que las mantas é hilazas que se consumieran en el Estado pagaran como alcabala cinco centavos por libra, surtiendo la derogacion sus efectos desde primero de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho.

Considerando: que el decreto número 31 deja libertad al comercio, para que el consumo de efectos se verifique ó no en el Estado, pues solo se refiere á los que en él se consuman, y que siendo generales sus disposiciones no se causa ningun gravámen particular que importe violacion de garantias; se declara:

Que se revoca la sentencia pronunciada el 18 de Diciembre último por el juzgado de Distrito de Guanajuato, que dispuso: que la justicia de la Union ampara y protege á la casa de Valencia y Gonzalez, representada por Don Eusebio Gonzalez, contra el decreto número 31 de la II. Legislatura del Estado, para que no se haga efectivo ese decreto en el cargamento de cuatrocientos diez tercios de manta que llegaron á Guanajuato el primero de Octubre del año de 1868, consignados á Don Manuel Gonzalez, por violarse en este caso, con el impuesto decretado, la garantia que otorga el artículo 14 de la Constitucion federal á todos los habitantes de la República; y en consecuencia se decreta:

Que la justicia de la Union no ampara ni protege á la casa quejosa contra el decreto número 31 de la Legislatura de Guanajuato, fecha 27 de Setiembre de mil ochocientos sesenta y ocho.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado

de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, doce de Enero de mil ochocientos setenta y dos.
—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Guadalupe Mendez en representación de su hijo Arnulfo, contra la providencia de los CC. Miguel Vega regidor de policía y Francisco Rebolledo jefe político del cantón de Coatepec, por la que fué reducido á prisión Arnulfo, y condenado al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal dice: que ha examinado atentamente todas las actuaciones relativas al juicio de protección y amparo que ha promovido el C. Guadalupe Mendez en representación de su hijo Arnulfo contra providencias del C. Miguel Vega, regidor de policía que fué del H. Ayuntamiento de la Villa de Coatepec, dirigidas á que fuese este último calificado de vago y destinado al servicio de las armas.

Resulta comprobado, que efectivamente

el indicado C. regidor de policía, á consecuencia de haber recibido varios insultos del joven Arnulfo Mendez, lo mandó aprehender y lo puso á disposición de la gefatura política bajo el supuesto falso de que solo se ocupaba de andar paseando en las calles de la población y de tomar licor en abundancia, sin que hubiese precedido averiguación alguna judicial mayormente cuando se trataba de hechos en que se consideraba ofendido el funcionario que dictaba dicha providencia, y por lo mismo ageno de la debida imparcialidad: que el C. jefe político Francisco Rebolledo y Cuevas procediendo en el caso con la misma irregularidad, no obstante que el Código penal del Estado y el de procedimientos determinan el modo y forma de averiguar y castigar los delitos de vagancia y mal entretenimiento, lo consignó al servicio de las armas siendo menor de diez y ocho años, infringiendo al mismo tiempo la ley general de 28 de Mayo de 1869, que dispuso el modo de remplazar las bajas del ejército y la de la H. Legislatura del Estado de 12 de Agosto del mismo año que ordenó se cubriera el contingente de sangre correspondiente al mismo Estado con voluntarios enganchados y el art. 20 de la Constitución, federal que concede á los que deben ser encausados por algun delito; ciertas garantías que no se han llenado, supuesto que no se formó proceso alguno: que además de haber sido violadas dichas garantías, lo fueron también las consignadas en los artículos 59 y 16 por haberse obligado al C. Arnulfo Mendez á prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento, molestándolo en consecuencia en su persona y familia, como está justificado con la propia queja que su padre ha entablado: que fué filiado sin los requisitos legales y destinado á servir en el batallón fijo de esta plaza, que ahora es tercero de línea de infantería, el 23 de Marzo de 1870, teniendo 16 años de edad segun consta de la respectiva filiación que obra certificada á fojas 3, no debiendo